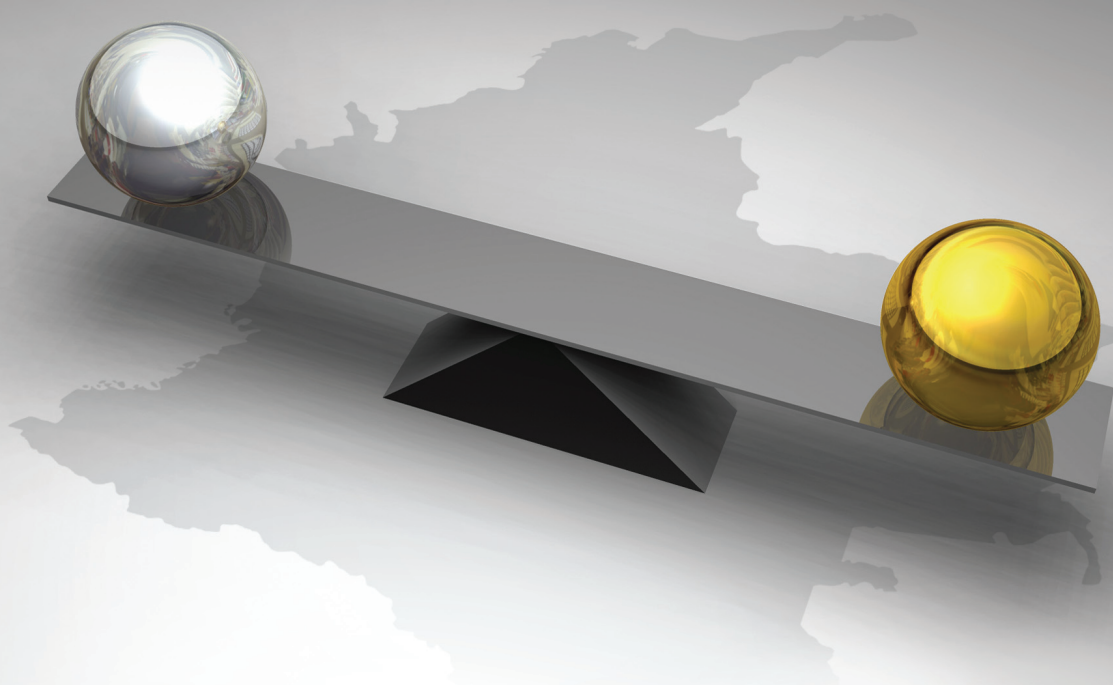


*Grenfieth de Jesús Sierra Cadena*

# EL JUEZ CONSTITUCIONAL: UN ACTOR REGULADOR DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El caso de la descentralización en Colombia



*Colección Textos de Jurisprudencia*

*Serie maestría*



# **El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas**

**El caso de la descentralización  
en Colombia**

**Grenfieth de Jesús Sierra Cadena**



COLECCIÓN TEXTOS DE JURISPRUDENCIA  
SERIE MAESTRÍA

©2009 Editorial Universidad del Rosario  
©2009 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  
Facultad de Jurisprudencia  
©2009 Grenfieth de Jesús Sierra Cadena

ISBN: 978-958-738-017-0

Primera edición: Bogotá, D.C., agosto de 2009  
Corrección de estilo: Lina Morales  
Diagramación: Angélica Quinche Ramírez  
Diseño de cubierta: Lucelly Anaconas  
Impresión: Xpress. Estudio gráfico y digital  
Editorial Universidad del Rosario  
Carrera 7 No. 13-41 oficina 501 Tel.: 297 0200, Ext. 7724  
editorial@urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser  
reproducida sin el permiso previo escrito de la  
Editorial Universidad del Rosario.

---

SIERRA CADENA, Grenfieth de Jesús  
El Juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas.  
El Caso de la descentralización en Colombia / Grenfieth de Jesús Sierra Cadena—  
Facultad de Jurisprudencia. Bogotá: Editorial  
Universidad del Rosario, 2009.  
178 p.—(Colección Textos de Jurisprudencia. Serie Maestría).

ISBN: 978-958-738-017-0

Derecho constitucional – Colombia / Jueces – Legislación – Colombia / Ejecución  
(Derecho administrativo) – Colombia / I. Título / II. Serie.  
342.861 SCDD 20

---

Impreso y hecho en Colombia  
*Printed and made in Colombia*

# CONTENIDO

Introducción .....	10
Presentación del problema.....	10
Fundamento teórico del problema .....	14
Desarrollo del problema.....	25

## **Primera parte**

### **Un análisis teórico**

El juez constitucional dentro del sistema de las políticas públicas ....	27
--	----

## **Capítulo 1**

### **La relación entre las políticas públicas y el derecho**

1.1. La dimensión jurídica de las políticas públicas .....	31
1.1.1. La transformación del derecho desde las políticas públicas .	32
1.1.2. La transformación de las políticas públicas desde el derecho.....	35
1.1.3. La crisis de la noción del “interés general” dentro del derecho público y las políticas públicas.....	41
1.1.4. La puesta en duda de la centralización de las políticas públicas y del derecho .....	45
1.1.5. Conclusión. ....	49
1.2. La pertinencia política del juez constitucional. ....	49
1.2.1. La división del poder y su redefinición hacia la gobernanza. ....	50
1.2.2. Los derechos fundamentales y la igualdad compleja en las políticas públicas. ....	56
1.2.3. La densidad normativa y la indeterminación del derecho. ....	69

1.2.4. La Constitución como referencial global de las políticas públicas .....	73
1.2.5. Conclusión. ....	77

## Capítulo 2

### El juez constitucional un actor de políticas públicas

2.1. La decisión del juez constitucional .....	80
2.1.1. El problema de la decisión.....	81
2.1.2. La jurisprudencia constitucional como extensión del debate democrático (el principio de la autolimitación). ....	85
2.1.3. La jurisprudencia constitucional como “ <i>feedback</i> negativo” del sistema democrático. ....	92
2.1.4. El <i>status</i> del juez constitucional dentro de los actores de políticas públicas. ....	95
2.1.5. Conclusión. ....	99
2.2. El juez constitucional entre lo jurídico y lo político. ....	100
2.2.1. La nominación de los miembros de la Corte Constitucional.....	101
2.2.2. Los tipos de control constitucional.....	104
2.2.3. Las relaciones con los otros poderes públicos. ....	107
2.2.4. La ubicación de la Corte Constitucional en el sistema jurídico-político colombiano. ....	110
2.2.5. Conclusión. ....	112

## Segunda parte

### Un análisis práctico

La regulación jurisprudencial de la política pública territorial colombiana .....	114
--	-----

## Capítulo 1

### La política pública territorial en Colombia

1.1. El origen normativo de la descentralización.....	120
1.1.1. El marco constitucional.....	120
1.1.2. El cuadro legal. ....	123

1.1.3. El cuadro reglamentario.....	125
1.1.4. Conclusión. ....	128
1.2. El desarrollo jurisprudencial de la descentralización. ....	129
1.2.1. La búsqueda de un referencial global-sectorial sobre el territorio. ....	129
1.2.2. La garantía del reducto mínimo de autonomía territorial. ....	133
1.2.3. La tutela constitucional de la descentralización. ....	137
1.2.4. Conclusión. ....	140

## **Capítulo 2**

### **Las bases jurisprudenciales de la descentralización**

2.1. La separación del poder y la dimension territorial .....	142
2.1.1. La autonomía fiscal de los territorios, ¿relativa o absoluta?.....	143
2.1.2. La autonomía presupuestal y la coordinación territorial.....	148
2.1.3. La reafirmación del poder central de gobierno desde la jurisprudencia constitucional. ....	152
2.1.4. Conclusión. ....	155
2.2. Los derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos. ....	155
2.2.1. La dificultad de encontrar la identidad sectorial. ....	156
2.2.2. La búsqueda de la igualdad compleja en los servicios del Estado.....	157
2.2.3. El servicio público y la autonomía local. ....	159
2.2.4. Conclusión. ....	164

## **Conclusión**

### **¿El juez constitucional, un actor sobresaliente de la democracia constitucional?**

Bibliografía.....	172
-------------------	-----

## Presentación del problema

Los interrogantes sobre lo que es o debe ser el juez constitucional frente al desarrollo y ejecución de la acción pública, en cuanto dominio exclusivo de la administración, están en el corazón de las nuevas reflexiones que orientan la construcción doctrinaria del derecho constitucional y el desarrollo teórico de las políticas públicas.

De antemano es necesario recordar que la gobernanza y el Estado de derecho son las nuevas estructuras que están orientando la construcción de los modelos de Estado, de individuo y de sociedad.

En este contexto, intentaré proponer, con todas las limitaciones que ello implica, una aproximación teórica al rol del juez constitucional dentro del sistema de las políticas públicas en Colombia –y, como ejemplo, el caso específico de la descentralización territorial–, buscando presentar el proceso mediante el cual el sistema jurídico-constitucional regula el sistema de políticas públicas en Colombia y, en este caso, la política territorial como un estudio de caso.

Ofrezco de antemano disculpas a los lectores e investigadores por los errores o desaciertos que cometa en este proceso. Ustedes conocen lo complejo del problema, y que toda nueva propuesta trae en su seno la posibilidad del error. Pero creo que se podrán generar discusiones alrededor de esta idea y la continuación del diálogo entre juristas, politólogos y administradores sobre la nueva dimensión del Estado como realidad política, jurídica y administrativa.

Tal propuesta asume la idea de un modelo jurídico en crisis, donde el derecho como estructura fundamental y fundadora de la modernidad se redefine en sus fuentes,<sup>1</sup> conceptos y actores, viéndose desafiado a reedificar el Estado-nación dentro de aquello que llamamos mundialización.

La política, como el arte de gobernar que reside en la coexistencia de la obediencia y de la libertad, se revaloriza como instrumento y fin de una sociedad que hoy se define como “cosmopolita” y regresa a la esencia primigenia de la “multitud”,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moor, P. *Pour une théorie micropolitique du droit*. Paris: PUF; 2005

<sup>2</sup> Moreau, P. F. *Spinoza et le spinozisme*. Paris: PUF; 2003.



como Baruch Spinoza la interpretaría en los albores de la Ilustración racionalista. Se revaloriza como acción moral capaz de fundar los nuevos valores de concebir al hombre desde un espacio territorial y temporal que no conoce límites y donde las demandas de la sociedad son cada día más complejas tanto en acciones de libertad como de cohesión social, bajo una idea más allá de la de gobierno, hacia el concepto de gobernanza.<sup>3</sup>

Es decir, la ley como “expresión de la voluntad general” –*hard law* o derecho duro– ya no es el orden universal del hombre dentro de la sociedad, surgiendo nuevas fuentes jurídicas; por ende, nuevos actores de eso que llamamos producción del derecho se consolidan en el *soft law* o derecho suave.<sup>4</sup>

La disertación se concentra, entonces, en: *identificar cómo la crisis contemporánea de los conceptos jurídicos y políticos desarrolla relaciones transversales entre ellos, en el momento cuando la jurisdicción constitucional se ve abocada a intervenir en el desarrollo de las políticas públicas, mediante su regulación, a través del control constitucional de la ley.*

Buscaré presentar a la autoridad constitucional como parte de la transformación de tales conceptos, con relación a los otros poderes públicos, en tiempos en los que la jurisdicción constitucional se ve llamada a regular políticas públicas. Propuestas de avance social que el Estado debe concretar y donde el juez constitucional se enfrenta al dilema de limitar los derechos individuales para garantizarlos, o ir más allá, e intervenir en su desarrollo, generando un sentimiento de “gobernabilidad” desde lo jurídico que plantea una discusión profunda sobre los límites de la jurisdicción constitucional en el espacio administrativo y político.

Pero ¿cuál es el fundamento que motiva tal discusión en Colombia? ¿Cuál es el punto común de la crisis de tales disciplinas? Es decir, ¿cuál es el hecho determinante de tal sinergia de conceptos y jurisdicciones dentro del Estado?

---

<sup>3</sup> “Un gobierno puede tener gobernabilidad en la medida en la que sus dirigentes cuenten con los apoyos políticos necesarios para gobernar y, sin embargo, hacerlo mal por faltarle la capacidad de ‘gobernanza’. Esta existe en un Estado cuando su gobierno posee las condiciones financieras y administrativas para transformar en realidad las decisiones que toma”. Adrián Darmohraj.

<sup>4</sup> “El auge del *soft law* como fuente autónoma con vocación de generar efectos jurídicos es un fenómeno que tiene su origen en el siglo XX en el campo del derecho internacional. En el contexto de las relaciones exteriores, los Estados integrantes de la Comunidad Internacional han desplegado un conjunto de prácticas tendientes a la creación de normas con efectos indeterminados”. Sarmiento, D. *El soft law administrativo*. Thomson Civitas; 2008.

El interés del problema reposa sobre el hecho de que Colombia presenta una debilidad institucional claramente establecida, que la separación del poder como presupuesto de la democracia y del Estado liberal está puesta en duda por la supremacía de un poder público sobre los otros y por falta de amparo institucional de los derechos fundamentales. Además la crisis del concepto del “interés general” ha determinado que tanto el derecho público como la administración pública y la política se vean avocados a redefinir sus fundamentos.

De acuerdo con ello, se buscará explicar cómo la autoridad constitucional se desarrolla y se coordina con relación a los otros poderes, en torno a esta realidad, para comprender la creación del derecho y la regulación de las acciones del Estado desde un nuevo actor que rompe la teoría clásica de los poderes públicos.

Así, tres elementos hacen parte de la crisis contemporánea del derecho: la división de los poderes públicos, las amenazas a los derechos fundamentales y el relativismo del concepto del “interés general”.

El tema se plantea polémico desde las ópticas clásicas de la teoría racionalista del derecho y desde la óptica de la teoría política del Estado liberal, como desde la visión clásica de las políticas públicas.

Para la primera, el juez cumple una función de constatación de la ley -en tanto norma jurídica- previamente dictada por el legislador y el control de constitucionalidad se limita a la verificación argumentativa y retórica de esta, respecto de la Constitución, sin mayores inclusiones en el campo de la política y menos del gobierno. Y donde la finalidad es la concretización de la Constitución en tanto que norma, por tanto la interpretación jurisprudencial del juez es un producto accidental del proceso mas no su finalidad, como lo anota el profesor Otto Pfersmanns.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “Recuérdese que la obligación principal del juez sigue siendo la concretización motivada del derecho positivo en vigor, en relación con el caso que le sea sometido y que haga parte de sus competencias. Entonces, para que la interpretación no sea solamente parte obiter dictum, sin la menor incidencia propiamente jurídica, se deben confrontar globalmente tres categorías o tipos de caso. (...) Además conviene distinguir lo anterior de otro problema muy diferente correspondiente a la motivación de las decisiones. La motivación es la explicación jurídica del resultado, no es el resultado mismo. Es la justificación de producción de una norma, no una norma. Las motivaciones pueden ser verdaderas o falsas, la norma puede ser correcta o incorrecta si se les evalúa bajo el sistema de reglas de organización y encuadra su producción. (...) puede presentarse un caso pro-

En la segunda, la separación de los poderes debe estar claramente establecida y cumplida dentro de los roles asignados a cada uno. Y para la tercera, las políticas públicas son desarrollos técnicos de la rama legislativa y ejecutiva con el objetivo de cumplir los fines del Estado.

Pero la crisis de la racionalidad jurídica y el tránsito hacia una etapa marcada por la “incertidumbre”,<sup>6</sup> tanto en los procesos como en los resultados del Estado, hacen necesario analizar el fenómeno de la redefinición de los poderes públicos y la creación y la producción del derecho desde nuevas fuentes y centros de producción, que están más allá del legislador y del concepto del Estado-nación.

Así como se vuelve esencial comprender la redefinición de las acciones del Estado desde nuevos paradigmas como es el *new public management*<sup>7</sup> y la intervención de nuevos actores (no clásicos) en el desarrollo de las políticas públicas, como resulta ser el juez constitucional cuando los derechos sociales toman una dimensión de mandatos objetivos y *prima facie* dentro del desarrollo de estas.<sup>8</sup>

Por esto, hablar del juez constitucional como actor del sistema de políticas públicas no deja de despertar sorpresa, puesto que surge el interrogante de ¿cómo una autoridad jurídica de control constitucional puede llegar a regular y en ciertos momentos a determinar políticas públicas del Estado, cuando este rol solo compete a la esfera legislativa y ejecutiva?

Se buscará demostrar que este presupuesto está en crisis y que el papel del juez constitucional es tanto jurídico como político, bajo el supuesto de proteger

---

blemático donde la frontera entre motivar y producción normativa se deshace; donde motivar un resultado configura, al mismo tiempo, una producción normativa.(...) Habría entonces una doble funcionalidad: los enunciados no serían únicamente descriptivos, pues ellos tomarían un valor prescriptivo emergente.” Otto Pfersmanns, integración por vía jurisprudencial y derecho constitucional, constitución e Integración, Universidad del Rosario, Banco Interamericano de desarrollo, Asociación Andrés bello. 2006, p; 191-199.

<sup>6</sup> Ver Beck, U. *La sociedad del riesgo*. Barcelona: Paidós; 2002.

<sup>7</sup> El *new public management* reposa sobre la convicción de que la administración pública debe inspirarse en el modelo de la gestión de la empresa privada, el cual es un modelo más eficiente.

<sup>8</sup> Bernal Pulido, C. *Fundamento, estructura y origen de los derechos sociales. Una crítica a “¿Existen derechos sociales?”* de Fernando Atria. Universidad Externado de Colombia; 2006.

los derechos fundamentales y garantizar que el poder esté real y efectivamente dividido dentro de la sociedad.

El análisis está inspirado en la escuela francesa de las políticas públicas, los estudios de Pierre Muller, Patrit Gales, Jacques Caillosse y Jean Pierre Gaudin, y los trabajos de derecho constitucional de Dominique Rousseau, Michel Troper, Louis Favoreu, Édouard Lambert, Pierre Moor, Mireille Delmas-Marty. Y el estadounidense Ronald Dworkin.

Todos ellos han discutido las crisis de la escuela clásica de las políticas públicas, del Estado-nación territorial, de la escuela racional jurídica; la relación entre la política y el derecho, el papel del juez constitucional como actor político, y plantean el tránsito de la democracia política hacia la democracia constitucional, como Rousseau lo ha esbozado en sus últimos trabajos, y la construcción de la idea de una internacionalización pluralista del derecho,<sup>9</sup> como Mireille Delmas – Marty lo ha presentando en el College de Francia.

## Fundamento teórico del trabajo

Es necesario preguntarnos: ¿de dónde viene tal poder del juez? De una parte, la democracia no es solamente una potencia política mayoritaria, es también el

---

<sup>9</sup> “El fenómeno de la internacionalización del derecho –que desborda el derecho internacional en beneficio de prácticas trans y supranacionales-, conduce a reconocer un estatuto de derecho positivo a ciertos conceptos jurídicos que tienen una vocación universal. Incluso si apenas se trata de un inicio, este reconocimiento es ya concebido por los partidarios del relativismo como una provocación.(...) La debilidad del universalismo jurídico no es solamente formal. En términos de legitimidad, se plantea una cuestión de relevancia: ¿se puede construir una comunidad de derecho sin que exista una comunidad de valores? En efecto los conceptos evocados, desde los derechos humanos hasta las diversas formas jurídicas adoptadas por la humanidad o por el mercado pueden ser a partir de ahora, en diversos grados y según las modalidades diferentes, invocados ante un juez, nacional o internacional. Incluyendo el universalismo normativo en el derecho positivo, dichos conceptos postulan una comunidad de derecho a escala planetaria.(...) Ahora bien, la conciliación no puede llevar ni a meros conceptos tradicionales, ni a meros medios de un derecho obligatorio y vinculante. (...)El realismo estaría dispuesto a hacer una llamada a las fuerzas imaginarias del derecho para salir de este callejón sin salida. Se trate de conceptos blandos o de norma ineficaces, las debilidades abren quizás otra vía para intentar construir conjuntamente una futura comunidad de valores, apostando por que lo flojo, lo suave, y lo blando actúen como el antepecho de esta complejidad. Es necesario sin duda alimentarse de la incompletion de las ideas para no sufrir las circunstancias.” Mireille Delmas-Marty, Estudios jurídicos comparados e internacionalización del derecho, Conferencia en el College de Francia. Curso: Lo Relativo y lo Universal. 2003.

reino del derecho, como afirma Georges Gurvitch. Así, los límites del poder son los interrogantes ineludibles del proceso democrático e, igualmente, el punto de partida del poder constituyente, en tanto que él es un poder originario que funda a todos los otros poderes.<sup>10</sup>

La Constitución se ha convertido en un derecho fundador que se ubica en la cima del sistema jurídico, determinando las bases del sistema democrático,<sup>11</sup> puesto que es un imperativo político y jurídico y no solo un referente normativo.

En consecuencia, el derecho constitucional es el derecho de la democracia, y la Constitución es la ley de la cual dependen todas las otras leyes, como Hans Kelsen lo afirmó en su teoría pura del derecho. El derecho constitucional toma así la plaza de un derecho global, capaz de portar sobre sí toda la estructura jurídica del Estado. Y el juez constitucional, en consecuencia, juega el rol de regulador del sistema jurídico-político, o de *feedback*, si se interpreta a la sociedad y al Estado desde una visión y metodología sistémica.

Todo esto presupone que los actores y los procesos jurídicos forman un sistema que construye la norma de la separación del poder y del respeto a las libertades públicas. El juez constitucional se transforma, entonces, en la figura emblemática de la democracia constitucional. Él interpreta la Constitución, él la modula.<sup>12</sup>

La justicia constitucional debe ser comprendida, de esta forma, en sentido largo, como agrupación de decisiones dadas por la totalidad de la jurisdicción, responsable de desarrollarla dentro de cada una de las acciones del Estado. Este fenómeno es conocido en Colombia, por los especialistas como *neoconstitucionalismo*.<sup>13</sup>

Existen dos ejemplos para reafirmar y comprender tal fenómeno. El primero es el caso del Consejo constitucional francés, que, luego de cuarenta años de

---

<sup>10</sup> Schmitt, C. *Théorie de la Constitution*. París: PUF; 1993, chapitre VIII, pp. 211-223.

<sup>11</sup> Ver Habermas, J. *Droit et démocratie*. Gallimard; 1997.

<sup>12</sup> Rousseau, D. *Droit du contentieux constitutionnel*. París: Montchrestien; 2004, p. 445.

<sup>13</sup> Así, hablar de neoconstitucionalismo(s) supone hacer referencia a dos cuestiones que deben estudiarse por separado. Por una parte, a una serie de fenómenos evolutivos que han tenido evidentes impactos en lo que se ha llamado el paradigma del Estado constitucional; por otra, a una determinada teoría del derecho que ha propugnado en el pasado reciente por esos cambios y/o que da cuenta de ellos, normalmente en términos bastante positivos o incluso elogiosos. En Colombia, el profesor Carlos Bernal Pulido lo ha presentado en detalle.

creación, se transformó en un actor determinante del sistema jurídico y político en Francia.

Sus decisiones del 16 de julio de 1971, “los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República son normas constitucionales”,<sup>14</sup> y del 23 de agosto de 1985, por la cual “la ley votada [...] no expresa la voluntad general, que solamente en el respeto de la Constitución”,<sup>15</sup> ilustran cómo los fallos de tal juez han contribuido a transformar radicalmente la concepción de la ley y de la Constitución en ese país.

El segundo caso lo constituye la Decisión T-406 de 1992<sup>16</sup> de la Corte Constitucional colombiana, la cual define y delimita los contornos de lo que es y debe ser el control constitucional en Colombia, denotando el tránsito de un juez pasivo que concretiza la ley hacia un juez que interpreta, concretiza y define el derecho, siendo capaz de ir más allá del parlamento.

Es así como, de una parte, la nueva concepción sobre la Constitución ha hecho evolucionar la plaza del juez constitucional de un control formal y rígido

---

<sup>14</sup> Décision 16 de juillet 1976, C.C.

<sup>15</sup> Décision 85-197 DC, 23 août 1985, C.C.

<sup>16</sup> “La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. [...] La aceptación de la tutela para los derechos económicos, sociales y culturales, solo cabe en aquellos casos en los cuales exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con los requisitos y criterios de distinción anotados; solo en estos casos, el juez puede, en ausencia de pronunciamiento del legislador, y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho fundamental, pronunciarse sobre el sentido y alcance de la norma en el caso concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que ponga fin a la violación del derecho. En tales eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no solo la gravedad de la violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino también las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de recursos y, por el otro, los propósitos de igualdad y justicia social que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez establecida la violación de un derecho fundamental, el juez se enfrenta a un problema de justicia distributiva”. Decisión T-406/92. M. P. Ciro Angarita Barón.



El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad, en tanto expresión constitucional de la democracia, como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo, una nueva dimensión de su actividad emerge, en medio de la redefinición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las Políticas Públicas, hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración, sin embargo, el juez constitucional ha ido consolidándose como un actor capaz de determinar sus contornos, desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va mas allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces, esta investigación está orientada a presentar, tanto a juristas, politólogos y administradores, el proceso mediante el cual el sistema jurídico-constitucional regula el sistema de políticas públicas y, en este caso, la política territorial para buscar demostrar como una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea de Estado y de democracia.



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1655

ISBN 978-958-738-017-0



9 789587 380170